

ASTILLERO

► ¿Dónde ha quedado la bolita?

► Cananea, EPR, obispos y ahorros

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

En Calderolândia no hay conflictos sociales a punto de estallar, sino negocios de grupo por defender y discursos de ilusión por pronunciar. Cananea no es, entonces, sino una excelente oportunidad de pagar favores al amigo Larrea, defendido desde el Bufete de Gobernación por el abogado de multimillonarios, Fernando Gómez Mont, y de repetir el numerito de escarmiento ejemplar que el foxismo practicó en Atenco y en Oaxaca. No hay oficio político, lecturas históricas ni sensibilidad social en quienes se encargan de administrar con espíritu de saqueo el fideicomiso en liquidación denominado México. Por ello juegan con fuego y se complacen con el obsceno manejo de leyes y códigos como presuntos legitimadores de acciones de fuerza contra mineros norteños.

La comisión de buena voluntad que trató de mediar entre la obsesión electoral llamada gobierno federal y el grupo guerrillero conocido como Ejército Popular Revolucionario (EPR) también se topó con esa ausencia de voluntad y de oficio político. La oficina de tramitación de asuntos de élite, antes denominada Secretaría de Gobernación, pasó de las frivolidades y el contratismo del difunto ocupante anterior a la opacidad y la intrascendencia política del litigante alegre. Por ello los esfuerzos de un grupo de notables ciudadanos por encontrar respuestas a la desaparición forzada de dos mexicanos se topó con el abandono y la desidia. En realidad, el calderonismo simplemente sostiene los pactos de complicidad que dan im-

punidad a entes como el gobernador de Oaxaca, en cuyos escuadrones de la muerte se perdieron las pistas de los miembros de la organización guerrillera que, como otros oaxaqueños y mexicanos, simplemente fueron desaparecidos en esta feria macabra de violaciones a los derechos humanos y de abusos policiales y militares que en todo el país se está viviendo.

Eso sí, desde algún lugar de las montañas de restaurantes con servicio sólido y líquido, remontado en las alturas del confort extremo, el submandante GM emitió un comunicado pidiendo a los mexicanos todos que le entremos al diálogo (aunque sea nomás entre nosotros, pues las "autoridades" están ocupadas haciendo negocios) y que la mencionada comisión de mediación no se disuelva (pues, seguramente, todavía podría aguantar otros años en el abandono y la desatención). Ah, y respecto a Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, pues con la novedad de que no se sabe nada, pero no por otra cosa sino porque la investigación ha sido "complicada". Ya ha pasado mucho tiempo de los hechos denunciados, y varias pistas no quisieron aguardar indefinidamente y prefirieron pasar a desvanecerse. Pero, sépanlo quienes deban saberlo, Gobernación quisiera encontrar a esos desaparecidos "por un principio elemental de justicia". No, pos sí.

Ha tocado a la normalmente alta jerarquía católica dar testimonio público de sometimiento a las reglas no escritas de convivencia con el narcotráfico que se han instaurado en México entero y que son una prueba palpable, incontestable, de que se

ha entrado en un nivel de ineficacia gubernamental y de inexistencia del tal estado de derecho. El arzobispo de Durango se ha declarado mudo y sordo para no atender más los requerimientos periodísticos de que abunde en su dicho de que el narcotraficante presuntamente más buscado vive en un municipio de aquella entidad norteña sin que las autoridades lo sepan, aunque todo mundo sí. Sus colegas, algunos de los cuales suelen tener tratos confianzudos con esos donadores de limosnas purificables, han dicho en una reunión episcopal que se debe actuar con prudencia en esos temas y no ha faltado quien, desde la estructura del poder católico mexicano, ha "lamentado" que el jerarca duranguense no cuente con pruebas de lo que dijo, haciendo el juego a la PGR y el desgobierno del Calderón que barajan evasiones legales para no confrontar al sacerdote que ha dicho lo que mucha gente supone y los vecinos del presunto prófugo confirman cotidianamente. El cuadro de intimidación colectiva tuvo ayer las pinceladas macabras de una leyenda colocada sobre el cuerpo de uno de los dos militares de inteligencia que fueron encontrados en las inmediaciones del Guanaceví arzobispalmente invocado en estos días como guarida conocida del empresario más exitoso que han producido el vicentismo y el felipismo. Ni gobernantes ni sacerdotes podrán con *El Chapo*, decía el mensaje sangriento.

No todo han de ser, sin embargo, malas noticias. Los piadosos legisladores federales han tenido a bien abrir la llave para que antes de



morirse de hambre, los mexicanos puedan hacerse de los ahorros que para un hipotético retiro (ahora, una broma cruel) hubieran hecho en las cuentas puestas antes en bandeja para que habilidosos negociantes las usaran como plataforma de respaldo de maniobras que dejaron a banqueros y empresarios ganancias sabrosas, y a los trabajadores una mueca amarga al ver que sus depósitos bajaban porque "habían perdido" en las ruletas a

que les llevaron sus tramos administradores. Pero ahora, quienes así lo deseen, podrán pasar a retirar una buena parte de sus ahorros devaluados, para que se vaya cerrando el episodio de esta versión presuntamente muy elaborada de lo que finalmente no es más que una adaptación tragicómica del juego fraudulento en que se trata de saber en dónde quedó la bolita.

Y, mientras se entiende que defender a Cananea y sus

mineros no es defender al cacique sindical junior de cuentas nunca claras (y se ve cuántos senadores realmente participan en el acto de apoyo que encabezará López Obrador), ¡hasta mañana, con Elbonso Lujambio y Alonsa Esther Gordillo renovando votos de complicidad y anunciando nuevos embates en nombre de la Alianza Calderón Elba, mejor conocida como Alianza por la Calidad de la Educación (y con Navarrete enca-

reciendo los sabidos enjuagues del perredismo de alquiler con el contratante Quique Gaviotón, quien como sus antecesores siempre ha controlado a los "opositores" de izquierda)!

RECIBE LA IGLESIA CATÓLICA A GÓMEZ MONT



Carlos Aguiar, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, minutos antes de que comenzara la sesión de ayer de la 87 asamblea del organismo religioso. En el acto, el responsable de la política interna del país dijo que no es necesario que el arzobispo de Durango, Héctor González, declare ante el Ministerio Público ■ Foto María Luisa Severiano

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx